

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
 JUZGADO : 12º Juzgado Civil de Santiago
 CAUSA ROL : C-21047-2019
 CARATULADO : MORAGA/FISCO DE CHILE

Santiago, veintiséis de Abril de dos mil veintidós

VISTOS:

Que con fecha 2 de julio de 2019, comparece don NELSON GUILLERMO CAUCOTO PEREIRA, abogado, domiciliado en Doctor Sotero del Río N° 326, oficina 1104, Santiago, en representación de don MATÍAS FABIÁN MORAGA CATALÁN, perito en construcción, cédula nacional de identidad N° 11.971.450-8, domiciliado en Pasaje Luisette 1219, Población Yugoslavia, comuna de Pudahuel, Santiago; doña VALESKA ISABEL MORAGA CATALÁN, profesora, cédula nacional de identidad N° 11.549.779-0, domiciliada en Pasaje Puerto Ingeniero Ibáñez 7649, Villa Los Puertos, comuna de Pudahuel, Santiago; doña MARTA DELICIA CATALÁN NAVARRO, jubilada, cédula nacional de identidad N° 6.065.119-1, domiciliada en pasaje Chopin 1969, Villa Los Clásicos, Rahue Alto, ciudad de Osorno, Región de Los Lagos; don HÉCTOR ALEJANDRO MORAGA CATALÁN, topógrafo, cédula nacional de identidad N° 12.023.521-4, domiciliado en pasaje Chopin 1969, Villa Los Clásicos, Rahue Alto, ciudad de Osorno, Región de Los Lagos; y doña GLADYS ANDREA MORAGA CATALÁN, educadora de párvulos, cédula nacional d de identidad N° 12.723.033-1, domiciliado en pasaje Haydn 1920, Villa Los Clásicos, Rahue Alto, ciudad de Osorno, Región de Los Lagos, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del FISCO DE CHILE, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago.

Refiere que en el contexto del régimen de facto que gobernó Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990, bajo cuyo imperio se habría implementado una política sistemática de detención, tortura y desaparición de ciudadanos opositores, su padre, don HÉCTOR MORAGA GARCÉS, entonces de 33 años, quien era carpintero, debido al golpe de Estado y que era militante activo del partido comunista, el último día que lo vieron fue el 22 de julio de 1976, al irse a trabajar en la mañana, nunca regresó, lo buscaron en todas partes y nadie tenía noticias y por muchos años, no supieron nada de él. Su madre callaba. Sus vidas cambiaron drásticamente, precarizándose, al punto que los mayores se vieron en la obligación de trabajar desde los 13 años para ayudar a



mantener a la familia y sin saber nada de su padre. El informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha establecido que don Juan Héctor Moraga Garcés, ex dirigente juvenil de la CUT y militante del PC, fue detenido en la vía pública El 22 de julio de 1976. Precisa el Informe que “respecto del cual funcionarios de la Comisaría de Carabineros ubicada en la Población Roosevelt de Pudahuel informaron a sus familiares que había sido detenido por ebriedad, y trasladado a la sección Capitán Yáber de la Penitenciaría, lugar donde se negó su detención. Desde esa fecha el afectado se encuentra desaparecido y nunca más se tuvo noticias de él.

La Comisión está convencida de que su desaparición es obra de agentes del Estado, “quienes violaron así sus derechos humanos.”

Afirman que su padre fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos.

Sostienen que han sufrido un severo daño de índole extrapatrimonial, el cual se ha manifestado durante toda su vida, desde que tuvieron lugar los acontecimientos ya reseñados.

Argumenta que, conforme al derecho internacional y a la Constitución Política de la República y Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fue víctima de un crimen de lesa humanidad, lo que sería fundamental a la hora de resolver en cuanto a la responsabilidad de reparación que le cabe al Estado de Chile en este caso.

Citan profusa jurisprudencia en la que se ha considerado un estatuto de normas que privilegian y desarrollan los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, debiendo ponderarse el estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito de los derechos humanos a la luz de las normas de carácter público e internacionales, y no bajo las normas del derecho privado, tornándose así en imprescriptibles las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Terminan solicitando que se condene al demandado al pago total de \$1.000.000.000, correspondiéndoles a cada uno de los demandantes, la suma de \$200.000.000 o la suma que el tribunal determine, a título de indemnización por daño moral, que se les ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en la persona de su cónyuge y padre, respectivamente, don Juan Héctor Moraga Garcés, por parte de agentes del Estado de Chile, más reajustes, intereses y costas.

Que con fecha 19 de julio de 2019, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

Con fecha 6 de agosto de 2019, el demandado contestó el libelo pretensor, solicitado el rechazo de éste en todas sus partes.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, la que funda en que los demandantes ya han sido suficientemente indemnizados con motivo de los hechos por



invocados, mediante transferencias directas de dinero (establecida por la Ley N° 19.123), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales, Museo de la Memoria, establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo a su juicio rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, 19 de julio de 2019, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio de lo anterior, para el evento de estimarse no aplicable la norma citada, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, por cuanto desde la fecha en que pudo ser exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, también habría transcurrido el plazo antes mencionado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.



En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia. Además, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por los demandantes, por parte del Estado, pues, de lo contrario, estos recibirían un doble pago.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente litis.

Que con fecha 21 de agosto de 2019, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

En primer lugar, señala que todos los actos de reparación llevados a cabo por el Estado luego de 1990 solo han venido en compensar parcialmente los daños sufridos por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo cual no obsta en modo alguno el ejercicio del derecho a petición mediante la demanda incoada en autos, dado que nunca un tribunal de la República ha fijado en este caso el monto de la reparación que debería obtener, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Ahonda, haciendo presente que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles la pensión de sobrevivencia con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el tenor inequívoco de su artículo 24. Y por último cita jurisprudencia en que el Fisco ha sido sentenciado a pagar indemnizaciones a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados.

En segundo lugar, descarta absolutamente que las únicas reglas que existan para regular la responsabilidad del Estado sean las contenidas en el Código Civil, por cuanto ello significaría negar validez y eficacia a otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional, reconociéndolo así la Corte Suprema en diversos fallos. Ello en atención a que el hecho cuya reparación se demanda es un delito de lesa humanidad.

Por último, afirma que ninguna indemnización será capaz de borrar los daños permanentes sufridos por la demandante, con ocasión de la detención, torturas y otros tratos inhumanos, por agentes del Estado, debiendo ser el tribunal quien, en definitiva, fije el monto de la indemnización satisfactiva.



Que con fecha 10 de septiembre de 2019, el demandado evacuó la duplica, sin agregar nuevos antecedentes.

Que con fecha 6 de diciembre de 2019, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales ésta hubo de recaer.

Que con fecha 7 de abril de 2022, se citó a las partes para oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, doña MARTA DELICIA CATALÁN NAVARRO y, sus hijos; don MATÍAS FABIÁN MORAGA CATALÁN, doña clbVALESKA ISABEL MORAGA CATALÁN, HÉCTOR ALEJANDRO MORAGA CATALÁN y GLADYS ANDREA MORAGA CATALÁN, cónyuge e hijos de FÉCTOR MORAGA GARCÉS, declarado por la COMISIÓN RETTIG, como víctima de violación a los derechos humanos, demandaron en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, a objeto de que el ente estatal sea condenado a pagar en su favor la suma total de \$ 1.000.000.000, pagando individualmente a cada uno la suma de \$200.000.000 o la suma que el tribunal determine, más reajustes, intereses y costas, a título de indemnización por el daño moral que se les infirió con ocasión de la desaparición de su padre, a manos de agentes del Estado.

Segundo: Que, legalmente emplazado, el demandado opuso primeramente la excepción de reparación satisfactiva, por ya haber recibido el demandante diversos beneficios asistenciales por parte del Estado. Asimismo, opuso la excepción de prescripción extintiva conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Por último, alega lo desproporcionado que resulta la suma pretendida por el actor, la improcedencia de que se le indemnice nuevamente a raíz de los mismos hechos y la impertinencia de aplicar intereses y reajustes sobre una eventual indemnización que se declare en la sentencia que dirima la controversia.

Tercero: Que, en el trámite de la réplica los demandantes buscaron refutar las defensas opuestas por el demandado, manifestando que no ha existido una reparación íntegra por parte del Estado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que la prescripción civil no opera tratándose de atentados de lesa humanidad, y que es el tribunal quien en definitiva debe fijar el monto de la indemnización que corresponde.

Cuarto: Que, en el trámite de la dúplica el demandado no agregó nuevos antecedentes.

Quinto: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, los siguientes documentos:

- 1) Copia de sentencia de primera instancia dictada con fecha 31 de agosto de 2020 por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Mario Carroza Espinosa en la causa



- Rol 148-2015 Episodio Juan Héctor Moraga Garcés, seguida por el secuestro calificado de la víctima.
- 2) Certificado Rettig que da cuenta que JUAN HÉCTOR MORAGA GARCÉS, fue declarado víctima de violación a los derechos humanos.
 - 3) Certificado de matrimonio JUAN HÉCTOR MORAGA GARCÉS y MARTA DELICIA CATALÁN NAVARRO.
 - 4) Certificado de nacimiento de HÉCTOR ALEJANDRO MORAGA CATALÁN.
 - 5) Certificado de nacimiento de VALESKA ISABEL MORAGA CATALÁN.
 - 6) Certificado de nacimiento de MATÍAS FABIÁN MORAGA CATALÁN.
 - 7) Certificado de nacimiento de GLADYS ANDREA MORAGA CATALÁN.
 - 8) Informe de atención psicológica emitido por el psicólogo don José Latorre Salas, de fecha 30 de abril de 2020, respecto del paciente don Matías Fabián Moraga Catalán.
 - 9) Informe de atención psicológica emitido por el psicólogo don José Latorre Salas, de fecha 05 de mayo de 2020, respecto de la paciente doña Valeska Isabel Moraga Catalán.
 - 10) Informe de daño psicológico emitido por la trabajadora social doña Paula Cárcamo Pérez, la psicóloga doña Daniela Barrientos Gómez y el médico de familia Dr. Carlos Morales Negrón del Programa PRAIS del Servicio de Salud de Osorno con fecha 15 de enero de 2019, respecto de doña Gladys Moraga Catalán.
 - 11) Informe de daño psicológico emitido por la trabajadora social doña Paula Cárcamo Pérez, la psicóloga doña Daniela Barrientos Gómez y el médico de familia Dr. Carlos Morales Negrón del Programa PRAIS del Servicio de Salud de Osorno, con fecha 10 de enero de 2019, respecto de don Héctor Alejandro Moraga Catalán.
 - 12) Informe de daño psicológico emitido por la trabajadora social doña Paula Cárcamo Pérez, la psicóloga doña Daniela Barrientos Gómez y el médico de familia Dr. Carlos Morales Negrón del Programa PRAIS del Servicio de Salud de Osorno, con fecha 15 de enero de 2019, respecto de doña Marta Delicia Catalán Navarro.
 - 13) Copia de la Norma Técnica N° 88 “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 – 1990”, en cuyo capítulo II, punto 2, se refiere a los efectos bio-psicosociales asociados a la experiencia traumática de, entre otras, los familiares de detenidos desaparecidos y/o ejecutados políticos.
 - 14) Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile.



15) Respuesta del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presentada en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” en el mes de febrero de 2018, donde hace un reconocimiento explícito de responsabilidad internacional, y donde señala expresamente que la prescripción extintiva de la acción civil no se puede aplicar en los casos de esta naturaleza.

Sexto: Que, la parte demandante también allegó al proceso declaraciones Juradas que a continuación se reseñan sucintamente:

▪ Bernardita del Carmen Bustamante Bustamante

Declara que conoce hace muchos años a Matías ya que son vecinos, ella vive ahí desde 1968, declara que cuando su papa desapareció, ellos fueron discriminados, pasaron hambre, les decían comunistas.

▪ Norma Moreno Toloza

Declara que es vecina desde hace casi 60 años y le consta que desde que su padre desapareció, pasaron muchas necesidades y estaban muy solos.

▪ José Bernardo Latorre Salas

Reconoce que elaboró el informe de atención psicológica en su calidad de perito, dada su experiencia en materia de derechos humanos, y en la aplicación del protocolo de Estambul, de doña Valeska Moraga y don Matías Moraga y declara que constató los daños sufridos por ellos, como también de los restantes miembros de su núcleo familiar de origen. Resume que el hecho traumático que aconteció a esta familia, derivada de la desaparición forzosa de su padre, que ocasionó un daño muy profundo por cuanto ellos eran niños, además de perder a su padre por la acción de agentes del Estado, debieron afrontar todo lo que implica una situación de pobreza extrema, asociada a una soledad inexplicable para ellos, en esa etapa infantil, en donde el personaje más relevante fue su madre, la cual es siempre vista realizando un esfuerzo sobrehumano, con mucha pena, con mucha soledad. Destaca particularmente la situación de vulneración de Matías, que de niño fue estigmatizado y violentado por su condición de ser hijo de un detenido desaparecido y por el hecho de tener o llevar los nombres de que le puso su padre “Marx Lenin” lo cual le significó de ser permanentemente discriminado y tratado de comunista.

Por otra parte, declara que el hecho de nunca tener una respuesta adecuada del por qué desapareció su padre, significó desde el punto de vista psicológico es un hecho de no sanación del núcleo familiar, no hablado en la familia, donde cada uno de sus integrantes lo evidenció en silencio, precisamente por el dolor que a cada uno de ellos representa o representaba esa situación.



Finalmente destaca que gran parte de la sintomatología que se describen en los informes respectivos, van a estar presentes permanentemente a lo largo de sus vidas.

Séptimo: Que, el demandado, en apoyo de sus asertos, acompañó un oficio de fecha 5 de abril de 2019, remitido por el Instituto de Previsión Social.

Octavo: Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, con el mérito de los documentos signados con los numerales 1) al 12), del considerando quinto, más las declaraciones reseñadas en el considerando sexto, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido los demandantes víctima de violación a los derechos humanos por repercusión, al haber desaparecido su padre a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

Noveno: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley N° 19.123 a las víctimas por repercusión de violaciones a los derechos, reconocidas por el Estado de Chile.

Décimo: Que, en el ámbito internacional de los Derechos Humanos, de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

Undécimo: Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó la Ley 19.123, que contempla diversos mecanismos de reparación, los que sin embargo, no pueden considerarse como finales o únicos y no obsta a que individualmente cada una de las víctimas reconocidas así, por el Estado de Chile, persigan una reparación por el



daño moral, que aminore en alguna medida el daño sufrido por los agentes del Estado, en el concierto de una política de Estado, como se dirá más adelante.

Creándose asimismo, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política. De ésta forma, el Informe Rettig reconoce la existencia de una responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio”, (artículo 1 D. S. N° 355).

Duodécimo: Que, la Ley en análisis, estableció una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política, la que sería compatible con cualquiera otra pensión o beneficio y un bono compensatorio, además de otros beneficios.

Que, por otra parte, la Ley N° 19.992, otorgó similares beneficios a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$1.353.798 y \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

Décimo Tercero: Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas “*leyes de reparación*”, como ya se ha dicho, si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renuncias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.



Décimo Cuarto: Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5° de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Décimo Quinto: Que, la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

Décimo Sexto: Que, la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional.

Décimo Séptimo: Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

Que, a mayor abundamiento, el artículo 131 de la Convención de Ginebra y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de acuerdo a los cuales el estado parte no puede invocar normas de derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, de ahí que atendido que no es posible concebir la prescripción de la acción penal, en tanto delito de lesa humanidad, "... cabe preguntarse que podría justificar que éste motivo de extinción de responsabilidad fuese aplicable a la



responsabilidad civil conforme a los extremos del Derecho Privado, si el hecho fuente de la responsabilidad es uno solo y de índole penal y si la responsabilidad de esta especie siempre será exigible”. Por lo que atendido que la acción penal del delito de lesa humanidad es imprescriptible, la acción civil derivada del mismo hecho, no puede estar sujeta a las normas de Derecho Interno de prescripción patrimonial del derecho privado, lo que resulta incoherente y contraviene las normas de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por disposición expresa del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República.

Décimo Octavo: Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

Décimo Noveno: Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido éste como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también “...la situación de los familiares de detenidos desaparecidos es un dolor permanente, sin fin. No hay posibilidad de descanso, la sensación de impotencia va haciéndose crónica. Con los sucesivos hallazgos, la posibilidad de la muerte como desenlace se convierte en realidad (...) En la medida que no hay respuestas o evidencias que permitan resolver estas interrogantes, se pone al familiar ante la dramática situación de tener que ser el quien defina un desenlace. Para la mayoría de los familiares esto es inaceptable. Con ello se agudiza la sensación de impotencia e incertidumbre.

La búsqueda es permanente, primero fue el peregrinaje por cárceles, centros de detención, postas, el Instituto Médico Legal. Luego seguir las pistas, las informaciones, los rumores, hoy es la búsqueda de los restos.

Los familiares relatan con desesperanza como el dolor provocado por la muerte se ha agregado el daño producto del maltrato que, tanto las víctimas como ellos mismos, han recibido de parte de la sociedad, del Estado y de sus instituciones. Ello ha provocado una alteración en sus relaciones con el mundo exterior y ha configurado una sensación de haberse convertido en seres marginales y marginados...” (Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; Capítulo IV: “Efectos Familiares y Sociales de las más Graves Violaciones a los Derechos Humanos”).

Vigésimo: Que, en consecuencia, habrá de decirse que, en la especie se ha acreditado suficientemente que los demandantes son víctimas por repercusión reconocidas como



tales por el Estado de Chile, al ser cónyuge e hijos de don HÉCTOR MORAGA GARCÉS, detenido desaparecido a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquel secuelas como las descritas por los testigos que depusieron autos, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción experimentada por los demandantes, difícilmente superable por el mero transcurso del tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

Vigésimo Primero: Que, el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando. De esta manera, los hechos en que incurrieron los agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por los demandantes, por la detención desaparición de su padre y marido en manos de agentes del Estado de Chile, el largo camino recorrido en su búsqueda sin que hasta ahora, se tengan certezas respecto de su destino, por lo que el demandado se encuentra en definitiva, obligado a indemnizarlos.

Vigésimo Segundo: Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que el demandado, mediante oficio remitido a este tribunal por el Instituto de Previsión Social, acreditó que los demandantes han sido beneficiarios de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas *“leyes de reparación”*, por un total la cónyuge doña Marta Catalán Navarro de \$99.535.741, Don Matías Moraga un total de \$10.061.200, doña Valeska Moraga un total de \$10.298.600, doña Héctor Moraga un total de \$10.298.600, doña Gladys Moraga un total de \$10.380.031. Debido a ello, a suma que con motivo de esta sentencia se concederá a cada uno de los demandantes a título de daño moral se fijará en la suma de \$80.000.000.

Vigésimo Tercero: Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

Vigésimo Cuarto: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, es, también, cierto que la decisión contenida en la misma sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar esta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su



notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce al absurdo de que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarán sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

Vigésimo Quinto: Que, no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; artículos 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.123; artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.992; artículo 1 de la Ley N° 20.874; artículos 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **SE DECLARA:**

- I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.
- II. Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, sólo en cuanto se condena al demandado FISCO DE CHILE al pago de \$80.000.000 en favor de cada uno de los demandantes; don MATÍAS FABIÁN MORAGA CATALÁN, doña VALESKA ISABEL MORAGA CATALÁN, doña MARTA DELICIA CATALÁN NAVARRO, don HÉCTOR ALEJANDRO MORAGA CATALÁN, doña GLADYS ANDREA MORAGA CATALÁN, por concepto de daño moral.



- III. Que, la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados a contar de la época de notificación de la presente sentencia a la parte demandada y hasta la época de pago efectivo.
- IV. Que cada parte pagará sus costas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE SI NO SE APELARE

**DICTADA POR DOÑA MARÍA SOFÍA GUETIERREZ BERMEDO, JUEZA
TITULAR//**

En **Santiago**, a **veintiséis de Abril de dos mil veintidós**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

